

Comentarios

gramas en la línea de asistencia directa: Mercados populares (con el método del Plan Bolívar 2000), Bodegas Ambulantes, Programa Materno infantil (haciendo énfasis en la lactancia materna), los Comedores Populares, los comedores comunitarios y reforzamiento del PROAL en su cobertura, número de productos incluidos en la cesta y la calidad de los mismos; teniendo como modalidad, que se realizará sobre la base de un programa de educación, participación, organización y articulación de la comunidades con el fin de garantizar el éxito de los Programas.

Este Plan se implementará en las zonas más pobres del País, por tal motivo se seleccionaron treinta y tres (33) municipios en dieciséis (16) Entidades Federales, todo el estado Vargas, y cinco (5) parroquias del Distrito Capital. Para la selección se tomó en cuenta la elevada tasa de mortalidad materna, altos índices de desnutrición, condiciones de vivienda, situaciones de la familia, la densidad poblacional, y presencia de redes de asistencia y proyectos de desarrollo social.

A este plan se le pueden hacer las siguientes observaciones. Es evidente que la problemática alimentaria de Venezuela es compleja y difícil de asumir. No se trata de implementar programas de asistencia directa para su solución por tres razones. La primera tiene que ver con la intención política, es decir, un problema alimentario de cualquier país, si se quiere solucionar, tiene que establecer acciones que incidan en la cadena agroalimentaria, lo cual significa tener unas líneas de producción establecida para satisfacer la demanda de alimentos, y establecer canales de distribución de los mismos de manera que los costos no sean inaccesibles. La segunda, tiene que ver con la capacidad técnica de producir tales alimentos; en Venezuela, esta estructura técnica está en manos privadas, el Estado no las posee, esta estructura técnica está en manos privadas, el Estado no las posee, tampoco posee los recursos necesarios para crearlas, sólo podría recuperar las existentes, por ejemplo, las plantas procesadoras y silos de arroz y maíz ubicados en Portuguesa. La tercera cuestión está vinculada con el ingreso necesario de la población para adquirir los alimentos suficien-

tes para mantener una sana nutrición. Pero mientras exista en Venezuela recesión económica, aumento del desempleo formal y falta de inversión que motorice el aparato productivo, siempre habrá una mayoría que no posea los recursos necesarios para acceder a los alimentos, y el Estado no tiene, ni la estructura, ni los recursos necesarios para mantener unos programas de asistencia directa por más de un año.

La Cumbre de la OPEP

Por iniciativa del gobierno venezolano, lanzada hace más de un año, se efectuó en Caracas, durante los días 27 y 28 de septiembre de 2000, la Segunda Cumbre de Soberanos y Jefes de Estado de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. La Primera Cumbre fue en Argel en el año 1975.

Normalmente, la OPEP adopta sus decisiones y elabora su estrategia a nivel de ministros de energía y petróleo. Estos se reúnen varias veces al año y trabajan en un ambiente de suma discreción y sobriedad. Como hombres de formación técnica hablan poco y cuando lo hacen, emplean una terminología pragmática, ajena a cualquier retórica altisonante.

Por ello, la mayoría de los gobernantes y ministros de los países de la OPEP parecen haber sentido cierto grado de desconcierto y preocupación cuando los representantes de Venezuela inicialmente les adelantaron la invitación para una Cumbre en Caracas. Temían que tal vez en ella se dirían cosas tendientes a causar zozobra en los mercados petroleros o a profundizar divergencias políticas existentes entre países miembros de la Organización.

Pese a estos temores, la Cumbre de Caracas se realizó con éxito, y prevalece la impresión de que su efecto será positivo para el prestigio y la influencia real de la OPEP. Se justificó históricamente, por el hecho de que la Organización cumple 40 años de existencia, y por la obligación que tiene de asumir nuevas y mayores responsabilidades internacionales en la coyuntura energética que la ha refortalecido. Era justo

Plan alimentario

El Plan de Asistencia Alimentaria Popular que está implementando el actual Gobierno trata de atender dos problemáticas fundamentales: primera, la inaccesibilidad a los alimentos necesarios de un 60 % de la población venezolana, según cifras oficiales; segunda, el alto índice de desnutrición en los grupos más vulnerables, por ejemplo, los niños de 0 a 6 años.

Para responder a esta problemática, el énfasis del plan es implementar las acciones necesarias para la ejecución de una Política Alimentaria de urgencia dirigida a los sectores más vulnerables del País. Estas acciones se concretan en una serie de pro-

que se celebrara en Venezuela, pues nuestro país ha sido un factor positivo en el logro de la unidad y coherencia que la OPEP ha demostrado durante los pasados dos años. Sobre todo, nuestros socios reconocen el papel destacado del ministro Alí Rodríguez como presidente de la OPEP.

Fue aprobada una declaración que recoge los elementos esenciales de una estrategia responsable y constructiva. En lugar de buscar un aumento ilimitado de los precios, la OPEP ya ha demostrado por sus hechos que su aspiración es la estabilidad de los precios en una banda aceptable, tanto para los productores, como para los consumidores. Se invita a éstos últimos a una conferencia mundial para armonizar los puntos de vista. Se muestra sentido de responsabilidad por el medio ambiente. De manera general, se asume una actitud universalista y conciliadora, y se evita cualquier asomo de animosidad hacia los países industrializados. Sólo se les reclaman sus exagerados gravámenes al consumo de derivados del petróleo: era necesario recalcar el hecho de que los mayores responsables del encarecimiento de los combustibles no son los "jeques petroleros" sino los gobiernos y empresarios del Occidente desarrollado. Por último, la declaración propone el fortalecimiento de una cooperación multifacética entre los propios países miembros.

El costo de la desigualdad

El revuelo causado por las millonarias indemnizaciones de ejecutivos revela lo tremendamente resentida que está la sociedad chilena con la malsana desigualdad que la caracteriza.

Malsana, porque una inicua distribución de la riqueza, como la que aflige a Chile, donde un dilecto 7,1% de la población acapara el 43% del ingreso, provoca estas aberraciones:

1.- Base moral de la delincuencia. Al existir una casta dorada, que encima provoca con su ostentación, la delincuencia actúa, cual Robin Hood, embebida de una cierta conciencia de actuar en justicia.

Atacar mansiones, secuestrar ejecutivos o robar autos de lujo pasa a ser, entonces, una forma de rebelión social. De ahí su agresividad con las víctimas: además de robarles se sienten llamados a castigarlos.

2.- Destrucción de la clase media. La desigualdad económica aniquila la clase media, el mayor factor de estabilidad. Sin ella, como en Perú, Ecuador, Colombia, la suerte oscila entre los extremos.

El modelo bi-polar de sociedad con dos clases límite, lleva a la violencia, o sea a andar en la cuerda floja de ser regido por la ignorancia o la arrogancia.

3.- Concentración de la inversión. Al haber tanta riqueza en un puñado de contentos, los que a su vez se apelotonan en un barrio de la capital, la inversión social -clínicas, protección policial, teatros- tiende a confluir a ese epicentro del dinero, dejando el resto del país en el barro.

4.- Trabajo malo. El clima organizacional de la empresa en Chile, el ambiente digamos, está provocando sus caídas. Detrás de percances como la varazón de balsas jaula con medio millón de dólares en salmones, del incendio de la planta, o del hundimiento del pesquero en la bahía, siempre hay un gerente que estaba en Santiago, el perla. Su alto sueldo lo hace creerse demasiado importante para las veleidades de terreno, quedando así lo más delicado en manos del peor pagado.

El gerente general debiera vivir a no más de una cuadra de la fábrica y ganar no más que seis trabajadores. El sólo hecho de saber que el gerente se echa lo de veinte y más trabajadores de a 400 mil cada uno, o lo de su centenar de obreros a sueldo mínimo, baja la productividad. Y el sabotaje sigue al mal ánimo como la carreta al buey.

5.- Miedo. La falta de equidad provoca inseguridad en los mismos beneficiados del sistema. Parlamentarios, gerentes y generales, duques de la administración pública, empresarios, o sea toda la clase dirigente se siente sitiada. Rejas, guardias, ventanas cerradas a machote y sobre todo, temor a la gente. ¿Se atreve el senador por Valparaíso a caminar (sin escolta) por el cerro

Alegre? ¿Comparte el general con la tropa? Son los primeros en sacar su plata del país y por algo será que justo a ese nivel hay mayor incidencia de suicidio y depresión juvenil.

Algo huele a podrido en el Estado de Dinamarca, dice Hamlet en una frase tan reveladora como su «to be or not to be.» Decir que el abuso es intrínseco a la empresa estatal es desconocer el altruismo y austeridad de los grandes gerentes del sector público, como Fernando Salas, Raúl Sáez, o Juan Pedrals.

En esa línea de argumentación oportunista, podríamos atribuir a la iniciativa privada el narcotráfico y la prostitución.

El mal olor viene más bien de la curiosa relación de la clase ejecutiva chilena con el dinero. En la práctica no existe en nuestro medio sanción penal ni moral al crimen de cuello blanco. Una pasadita por Capuchinos y listo el bote.

Por su parte, las estafas urdidas por economistas chilenos a las bancas de Costa Rica, de Ecuador y de Perú, como las perpetradas a empresas extranjeras tipo «negocio del siglo», les han dado su fama.

No sólo se han convertido en peligro hemisférico y en amenaza de saqueo para las empresas nacionales; han pasado a ser un impedimento a mayor inversión extranjera. Nadie se juega por la cueva de Alí Babá.

¿Qué hacer?, lo primero es transparencia, glasnost: que se sepa todo lo que ganan todos.

Comentari